



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

#### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

**Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021)**

REFERENCIA:	ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
ACCIONANTE:	CARLOS ANTONIO GARCÍA OSORIO
ACCIONADO:	NUEVA EPS
RADICADO:	050013105 020- 2021 - 00165
ACTA N°	037

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procedería a resolver la impugnación formulada por el accionante contra de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Veinte (20) Laboral del Circuito de Medellín, si no es porque se ha advertido una causal de nulidad en el trámite de la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 037** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

#### 1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- **La acción de tutela**

El señor CARLOS ANTONIO GARCÍA OSORIO interpuso la presente acción de tutela, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital, seguridad social en conexidad con la vida, debido proceso, salud y vida digna. Y como consecuencia, solicitó que se ordene a la entidad:

- i) Que haciendo uso de las ayudas diagnósticas, prescriba las incapacidades a que haya lugar, sin dilaciones; ii) Que efectúe el pago de la incapacidad comprendida entre el 22/02/2021 y el 23/03/2021, y las demás que se sigan causando hasta que obtenga la pensión de invalidez o reintegro; iii) De

respuesta oportuna a la petición de expedición de documentos.

Para sustentar su petición afirmó, en síntesis: i) Que es una persona de 62 años de edad afiliado a NUEVA EPS y cotizante activo al sistema de seguridad social en salud; ii) Desde hace varios años atraviesa una compleja situación de salud por múltiples patologías que lo han incapacitado por largos periodos de tiempo, lapso durante el cual ha tratado de reintegrarse a sus labores como taxista, pero no ha sido posible; iii) Ha venido presentando inconvenientes en la atención de salud, especialmente en la expedición de subsidios de incapacidad, pues pese a su estado de salud, su médico general le manifiesta que debe tramitar la pensión por invalidez y de manera verbal le señala que no se le pueden expedir nuevas incapacidades; iv) Por otro lado, en las revisiones periódicas con el médico especialista de Cardiología, sí ha obtenido incapacidades de lapsos hasta de un mes, y le ha dicho que debe seguir incapacitado, para lo que debe efectuar los trámites respectivos en la EPS, ya que no puede desempeñar sus labores dado el alto riesgo de padecer un infarto; v) Que el pasado 22/02/2021 el médico especialista le prescribió una incapacidad de 30 días, la misma que fue presentada ante la NUEVA EPS el 11 de marzo de 2021 junto con la solicitud de otros documentos, y a la fecha de presentación de esta tutela no ha obtenido respuesta; vi) Afirma que es la persona encargada de sufragar los gastos de su hogar, y que el mínimo vital de él y su familia se ha visto afectado por esta situación; vii) Adicionalmente la entidad ha vulnerado su derecho fundamental de petición, pues no le ha dado respuesta a la petición, y es por esto que solicita la intervención del juez constitucional; viii) Actualmente se encuentra adelantando los tramites de calificación ante la AFP Colpensiones para obtener la pensión de invalidez, y mientras eso sucede tiene derecho a que se le prescriban las respectivas incapacidades.

### **1.1. DEL TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA**

Habiéndose avocado conocimiento se notificó la accionada, quien intervino solicitando la desvinculación de la NUEVA EPS por no existir la vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Para este efecto sostuvo: i) Sobre el pago de incapacidades, verificada el área de prestaciones económicas de la entidad en su base de datos, no se presenta incapacidad transcrita del 22 de febrero al 23 de marzo de 2021, y para ello

debe el afiliado hacer el trámite; ii) Sobre las incapacidades, el personal médico adscrito a las EPS es autónomo en sus decisiones y son quienes tienen un contacto directo con el afiliado, y en los términos de la jurisprudencia constitucional, es el médico tratante quien debe determinar si la persona requiere un procedimiento, tratamiento o medicamento que proteja y recupere su salud, teniendo en cuenta los criterios científicos; iii) En estos términos, la intervención del juez constitucional se limita a lo ordenado por el médico tratante ya que el juez carece del conocimiento científico adecuado para determinar lo que requiere un paciente; iv) Adicionalmente, indicó que es improcedente la acción, dada la falta probatoria de omisión o ausencia de acción por parte de la autoridad pública o particular del demandado, argumentando que para que sea procedente la acción se requiere que exista una actuación u omisión del accionado en los términos de la sentencia T-066 de 2002; v) La NUEVA EPS tiene como política acatar y cumplir fielmente las normas que regulan el Sistema General de seguridad Social en Salud y el Plan Obligatorio en salud, y su intención siempre ha sido prestar el mejor de los servicios de salud.

## **1.2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Con providencia proferida el pasado **26 de abril de 2021**, la Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín decidió amparar los derechos del accionante y ordenó a NUEVA EPS que en un término de 48 horas pagara la incapacidad otorgada al actor por el médico tratante, que comprende el periodo entre el 22 de febrero de 2021 y el 23 de marzo de 2021; que dentro del mismo término diera respuesta de manera íntegra al derecho de petición elevado.

Para ello razonó así: i) Analizó la procedencia de la acción, y recopiló los lineamientos legales y jurisprudenciales del derecho al mínimo vital y su protección, el derecho a la seguridad social, el derecho al debido proceso, y el derecho de petición; ii) Para luego ahondar en el caso concreto, considerando, en primer lugar que efectivamente el actor realizó la gestión a su cargo de Solicitud y Notificación de transcripción, pero no se ha reconocido y pagado la incapacidad que comprende el periodo entre el 22 de febrero de 2021 y el 23 de marzo de 2021, por lo que consideró pertinente ordenar el pago de la misma; iii) En segundo lugar, no se probó que la entidad le esté negando algún procedimiento médico y no puede el juez constitucional proteger derechos cuando se trata de solicitudes

futuras, como lo expone la Corte Constitucional en sentencia T-228 de 2020; iii) Luego, sobre el derecho de petición, consideró que, pese a que la entidad aún está en el término legal concedido por el Decreto 491 de 2020, ya ha transcurrido un término más que prudente para que la accionada remita los documentos solicitados por el accionante, máxime que los mismos se encuentran en sus bases de datos, por lo que ordenó responder de manera íntegra, entregando la totalidad de los documentos solicitados por el accionante.

### **1.3. LA IMPUGNACIÓN**

El actor consideró que, si bien la sentencia es favorable, se quedó corta en la protección constitucional que se invocó por lo siguiente: i) La entidad, pese a conocer su estado de salud, lo ha privado injustificadamente de la expedición de nuevas incapacidades, en este sentido, los funcionarios de la entidad le han indicado de manera verbal que el director médico de la IPS dio orden expresa de no expedirle incapacidades adicionales dado que lo procedente era la calificación para obtener la pensión de invalidez, lo que ha sido una excusa que se le ha impuesto de manera injusta dada la responsabilidad de la entidad después de 540 días de incapacidad; ii) Indica que lo anterior no es su culpa, pues su concepto de recuperación es desfavorable y a la fecha se encuentra adelantando trámites para obtener la calificación y acceder a la prestación por invalidez, pero mientras ello ocurre, debe estar incapacitado como lo ha recomendado el médico especialista tratante en cardiología; iii) Es por ello que solicitó que se conminara a la entidad a levantar la restricción ilegal para la expedición de nuevas incapacidades, pues es una actitud contraria a los principios constitucionales, pero el despacho erradamente consideró que se trataba de la solicitud del tratamiento integral de salud, asunto que no se relaciona con lo pedido.

### **1.4. DEL TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA**

De acuerdo a la constancia secretarial que milita en el expediente<sup>1</sup> en el PDF se tiene conocimiento: i) Que presenta graves quebrantos de salud que no le permiten reintegrarse a su actividad laboral de conductor de taxi; ii) Que el médico especialista en cardiología le prohíbe laborar porque en cualquier momento puede sufrir un infarto

---

<sup>1</sup> Carpeta segunda instancia PDF 07A

y ocasionar un grave accidente; iii) Que el único galeno que le expide incapacidades es el especialista, pero solo lo puede consultar cada tres meses; iv) Que la última incapacidad que tiene es del mes de junio y precisamente otorgada por el médico especialista; v) Que su actividad económica es ser conductor de taxi, pero no la puede ejercer por sus problemas de salud; vi) Que está atravesando una grave situación económica porque no labora ni recibe el subsidio por incapacidad; vii) Que tiene concepto desfavorable de recuperación y por ello **radicó desde el 26 de abril de 2021 ante COLPENSIONES la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral.**

A juicio de la Sala, atendiendo a las anteriores consideraciones y a lo dispuesto en los **art. 9 de la Ley 352 de 1997 y 12 del Decreto Ley 1795 de 2000**, en consonancia con lo consagrado en el **parágrafo art. 16 de esta última norma**, es necesario disponer la vinculación de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**.

No puede perderse de vista que el inciso segundo del **artículo 13 del Decreto 2591 de 1991** al regular lo atinente a las personas que intervienen en el proceso:

**“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.** Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”.

A partir del contenido de las anteriores disposiciones, la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que aún a pesar de la informalidad inherente a este tipo de proceso constitucional en el que se busca privilegiar la celeridad en virtud de la necesidad de eficacia en la protección de los derechos fundamentales; en todo caso, su ejercicio se encuentra claramente cobijado por el principio constitucional del debido proceso, de manera que en su trámite se debe dar aplicación a todas las disposiciones constitucionales y legales con que cuenta el ordenamiento jurídico, no sólo para la adecuada realización de los derechos que la parte activa busca le sean protegidos, sino los de la parte accionada y los de quienes resulten afectados con las determinaciones que se adopten en su curso.

Se concluye entonces que, si se presentan actuaciones procesales que conlleven a la vulneración de los derechos fundamentales de debido proceso y de defensa, deben adoptarse las medidas dirigidas a su saneamiento para restablecer el equilibrio procesal y el derecho que ha sido de este modo conculcado.

Consecuente con lo anterior, y atendiendo a los hechos y pretensiones del escrito de tutela, la sentencia y la impugnación, es claro que en el presente proceso constitucional resulta imperioso declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia, inclusive, con el fin de que se integre a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES -, y se efectúe la notificación correspondiente.

El señor CARLOS ANTONIO allegó documentos en los que consta que radicó desde el 26 de abril de 2021 ante COLPENSIONES solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral y por esta razón, la señora juez al avocar conocimiento, y en uso de los deberes y facultades derivadas de los **artículos 19 a 22 del Decreto 2591 de 1991**, requerirá la información correspondiente en aras de verificar en que estado se encuentra dicho trámite; y las demás pruebas que considere necesarias para **resolver de fondo** sobre la protección de los derechos fundamentales invocados.

## **2. LA DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la Ley, **RESUELVE:**

Decretar la **NULIDAD** de la sentencia de primera instancia, con el fin de que se con el fin de que se avoque conocimiento teniendo como parte accionada a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, y se efectúe la notificación correspondiente.

En el auto con el que se avoque conocimiento, y en uso de los deberes y facultades derivadas de los **artículos 19 a 22 del Decreto 2591 de 1991**, requerirá la información correspondiente en aras de verificar en que estado se encuentra dicho trámite; y las demás pruebas que considere necesarias para **resolver de fondo** sobre la protección de los derechos fundamentales invocados.

RADICADO 050013105- 020 – 2021 - 00165 - 00

**NOTIFÍQUESE** esta decisión a las partes, por cualquier otro medio eficaz (Decreto 2591/91 Art. 16; Decreto 306/92 Art. 5).

**Los Magistrados,**

**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE  
CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 106 del 21 de junio de 2021.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>